

GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA: LA “DESATANIZACIÓN” DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

*Gabriel Murillo C.
Juan Carlos Ruiz V.*

1. La tentación populista y los *outsiders*

La gobernabilidad se refiere a la posibilidad cada vez mayor y más urgente de mantener el control político emprendiendo medidas y acciones gubernativas coherentes, eficientes y legítimas como respuesta a una amplia gama de demandas de la sociedad. Bajo esta definición, el apoyo de la población resulta una condición *sine qua non* para lograr y mantener grados de gobernabilidad aceptables. Por ello, el concepto de gobernabilidad se mueve dentro de parámetros democráticos donde entran a jugar todos los actores y las acciones propias de la democracia como pueden ser los partidos políticos, los órganos representativos, las elecciones populares, los mandatos imperativos, las asociaciones de interés, los mecanismos de participación, entre otros¹.

El control gubernamental se da entonces en la medida en que el Estado logra tomar sus decisiones respetando las reglas del juego democrático y moderando el accionar de los diferentes participantes de la arena política. Así vistos, los partidos

1 La definición que se presenta acá pretende recoger las diferentes aproximaciones de Angel Flisfich (1988). Igualmente se consultó la perspectiva diametralmente opuesta de Michael Coppedge (1990). Para complementar este marco conceptual puede verse a Waldo Ansaldi (1991), por último debemos hacer referencia a el trabajo de Elisabeth Ungar (1993).

políticos resultan ser la piedra angular para mantener la estabilidad gubernativa porque ellos son, en esencia, la expresión de la élite dirigente y de una porción significativa de la población. Tradicionalmente, la politología ha afirmado que los partidos políticos son el puente entre la sociedad y el Estado, algo así como una correa de transmisión de las demandas de la población en procura de respuestas satisfactorias emanadas del ente gubernamental. En este sentido, los partidos en la teoría de la Ciencia Política clásica tendrían el rol fundamental de canal y vínculo directo entre los decisores y los gobernados (Kelsen, 1977).

Sin embargo, en la práctica, los partidos políticos latinoamericanos son señalados en forma reiterada como órganos desprestigiados que responden a prácticas patrimonialistas y clientelistas para hacerse al poder y al botín burocrático. En otras palabras, los partidos políticos en la región son percibidos como órganos que buscan reproducir las condiciones de privilegio de un sector de la sociedad por medio de las dádivas y prebendas que otorga el Estado paquidérmico y burocrático. En buena parte y en forma creciente, la sociedad en Latinoamérica observa con desconfianza las elecciones y los partidos políticos porque ambos representan, a los ojos de la opinión pública, el interés de unos pocos por encima de la mayoría. De ahí que los índices de abstención electoral sean cada vez más preocupantes, incluso en aquellos países que han consagrado el voto obligatorio. Igualmente, la emergencia de líderes alejados y ajenos a los partidos tradicionales ("outsiders") representan el afán y la ansiedad por encontrar expresiones que aglutinen las reivindicaciones más acuciantes de la sociedad en general. También el surgimiento reiterado de movimientos suprapartidistas o el fortalecimiento de los partidos "atrapatodo" son la consecuencia de una sociedad que persigue incidir en las decisiones políticas para que estas no respondan a los intereses de una sola clase o de un sólo sector. Todo este nuevo proceso evidente en el concierto político latinoamericano deja en claro que los partidos políticos han perdido la legitimidad tan cara a la gobernabilidad. (Murillo y Ruiz, 1992).

El populismo que ahora reaparece en América Latina resulta ser la expresión de esta búsqueda de apoyo popular por encima de los partidos tradicionales y de la clase política atávica. El resurgimiento de las posturas populistas en la región es la expresión de unos líderes emergentes que buscan hacerse al favor de las masas por medio de un discurso mesiánico, protector, nacionalista, interpersonal, directo y, sobre todo, sin intermediarios. En otras palabras, el neopopulismo latinoamericano busca salvar la mediación de terceros como los partidos políticos e incluso los sindicatos. Al obviarse el rol del partido político, entre líneas se está señalando su falta de representatividad y su precaria condición de intermediación. En el fondo, el actor populista busca ejercer el poder con un fuerte apoyo de la población tal como

lo requiere la gobernabilidad. No obstante, el proyecto populista choca con serias dificultades. Primero, no tiene el sustento de las élites, entre otras cosas porque su discurso siempre cuestiona las clases dirigentes. Segundo, los régimenes populistas ya en el poder se des prestigian más rápidamente porque han alimentado expectativas desmedidas que después no pueden cumplir. De ahí que el populismo resulte ser una expresión perniciosa a largo plazo para mantener una adecuada gobernabilidad. En América Latina, el resurgimiento del populismo se observa en actores tan diversos como el "Compadre" Carlos Palenque o Max Fernández en Bolivia, la dinastía Bucaram en Ecuador, Tabaré Vazquez en Uruguay y, en menor medida, el M-19 en Colombia y el Partido de los Trabajadores en Brasil. (Murillo, 1993).

El fenómeno ya mencionado de los "*outsiders*", personajes que pretenden mostrarse como líderes alejados de los partidos políticos, se ha extendido a lo largo de la región como una respuesta a una sociedad latinoamericana que busca guías independientes de ataduras de la clase política y de los partidos tradicionales. En el nivel nacional se pueden mencionar a Fernando Collor de Melo en Brasil o a Alberto Fujimori en Perú. En el nivel regional está Ramón "Palito" Ortega o Carlos Reutemann en Argentina, Ricardo Belmont en Lima. Esto son apenas algunos ejemplos de "*outsiders*" que han perseguido una estrategia electoral señalando con dedo acusador las corruptelas, los intereses creados, el tráfico de influencias de los sistemas de partidos latinoamericanos. En síntesis, la erosión de los partidos inveterados ha servido de trampolín para la aparición de una clase dirigente que pretende hacerse al poder.

En este orden de ideas, algunas agrupaciones o movimientos políticos se han dedicado a mostrar un carácter suprapartidista que les permita acceder a sectores potenciales de votantes que anteriormente no captaban debido a su adscripción decidida e incluso recalcitrante con una cierta ideología o con un determinado proyecto político. Con el fin de ampliar su gama de seguidores los movimientos políticos se vacían de sus contenidos y comienzan a trasegar por el camino de los planteamientos vagos e insulsos. El no compromiso hace de estas colectividades agentes fatos de responsabilidad frente a sus electores. Incluso, en su afán por hacerse al favor de otros sectores descuidan los planteamientos que en el pasado les habían reportado el seguimiento fiel de sus adeptos. Los suprapartidistas son entonces movimientos de vieja estirpe que buscan colocarse una nueva etiqueta cívica y aglutinante que les procure la aceptación de vastos sectores de la población. Como ejemplo se pueden citar el Movimiento de Salvación Nacional y la Nueva Fuerza Democrática en Colombia o, quizás, el PDT en Brasil. (Dávila, 1992).

Por el contrario, los llamados partidos "atrapatodo" abarcan a un amplio espectro social tanto de sectores populares como de nuevas facciones de la élite. No

son tan solo los viejos partidos de masas que abarcan un sinnúmero de adeptos por tradición o adscripción. Los partidos "atrapatodo" latinoamericanos rebasan el simple marco de los partidos de masas para convertirse en agrupaciones políticas jóvenes que intentan recoger seguidores y electores de los antiguos partidos al igual que usufructuar el descontento de diferentes sectores de la sociedad. Por ello se puede encontrar la convivencia en un mismo partido tanto de un reconocido deportista como de líderes sindicales pasando por académicos, empresarios y artistas tal como se da actualmente en Venezuela con Causa Radical. Más ilustrativo resulta el caso de la Alianza Democrática M-19 en Colombia, cuyos integrantes en el Senado que cesó en 1994 pertenecían tanto a ex-guerrilleros de varios grupos subversivos como a reconocidos personajes del tradicional Partido Conservador. Los movimientos "atrapatodo" utilizan conscientemente su condición de flexibilidad para luchar electoralmente en la arena política, especialmente cediendo postulados programáticos por apoyos políticos. A diferencia de los partidos de masas, los movimientos "atrapatodo" latinoamericanos centran su atractivo electoral en esta peculiar condición de asegurar la concurrencia en sus filas de la más diversa gama de personajes de las fuerzas vivas de la sociedad. En este sentido, estos partidos recogen y seleccionan personajes de otros partidos tradicionales -generalmente de masas- de los sindicatos, de los gremios, entre otros, que les permite tejer una amplia red de relaciones políticas.

Por último, han surgido con gran fuerza los llamados movimientos "fachada" fundados por los candidatos con poco arraigo en los partidos tradicionales, con el fin de reunir unas causas electorales alrededor de su candidatura y de su campaña. Estos movimientos además de efímeros, no representan un medio adecuado para lograr el apoyo de los diferentes sectores políticos especialmente en el seno de las Cámaras Legislativas. Un candidato elegido con el simple apoyo de su improvisado movimiento, no logra sostenerse ante las embestidas de la oposición de otros partidos en el ejercicio del poder. Cambio 90 de Alberto Fujimori o el Partido de Renovación Nacional (PRN) de Fernando Collor de Melo han sido los ejemplos más comunes expresados al respecto. (Cerdas, Rial y Zovatto, 1992).

Todas estas "disfunciones" del sistema partidista citadas anteriormente, señalan que los partidos políticos en América Latina han sido satanizados, haciendo de la actividad política una suerte de azufre que alimenta los intereses creados de una clase o de un sólo sector de la sociedad. El paradojal estilo de hacer política en América Latina parece estar dado por la premisa: "Hacer política por fuera de la política". De esta manera se intentan obviar las intermediaciones de los partidos ya sea prescindiendo de ellos, ya sea vaciándolos en sus contenidos. Al existir coaliciones entre los diferentes grupos políticos o al querer aglutinar franjas más

disímiles y amplias de electores, los partidos de América Latina, han perdido su compromiso y su consecuente responsabilidad en el ejercicio gubernativo. Los rasgos populistas, los suprapartidistas, las alianzas y coaliciones entre partidos, los movimientos efímeros para sostener candidaturas de momento; han desdibujado en su conjunto las fronteras ideológicas y programáticas entre los diferentes movimientos políticos. Así vista, la política en América Latina se ha convertido en un gran mercado persa donde se vende la más amplia gama de productos electorales y se alimentan las ilusiones por una clase política que se asemeja a los encantadores de serpientes. En resumen, el afán por alejarse o desvirtuar el rol de los partidos políticos en la región ha traído como efecto negativo un desprestigio mayor de todos los elementos constitutivos del proceso democrático. Por ejemplo, la apatía de la población por insertarse en los mecanismos de participación; la alta abstención en los comicios electorales o el surgimiento de canales de expresión extralegales son la muestra contundente del desprestigio de la política en América Latina.

Los sistemas de partidos en la región acusan una gran fatiga a pesar de que la habituación democrática está en pleno proceso. Los largos años de gobiernos de facto cercenaron la disciplina partidista a tal punto que, hoy por hoy, la adscripción a un partido tiende a ser efímera y sólo responde a los intereses momentáneos de cada elección. Los partidos políticos latinoamericanos no logran concitar a los electores para recoger así el apoyo necesario y las mayoría cohesionadas para gobernar. Por ello, se suceden gobiernos diametralmente opuestos que persiguen políticas diferentes dejando sin continuidad las acciones de los gobiernos anteriores².

Paralelamente, la expansión de la corrupción administrativa en el hemisferio, que ya ha hecho estremecer a varios gobiernos e incluso ha hecho caer a otros, ha sido factor incidental en el desprestigio y la saturación de los partidos. Los escándalos y los juicios contra presidentes como Alan García en Perú, Fernando Collor de Melo en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, han repercutido ostensiblemente en el desprestigio de los partidos políticos que los prohijaron y los apoyaron.

A pesar de la precariedad del sistema de partidos en la región, la democracia ha logrado mantenerse desde los años ochenta. ¿Cómo podría explicarse entonces que con partidos políticos deslegitimados, los gobiernos hayan logrado cierto control sobre la sociedad en general? La experiencia latinoamericana reciente ha demostrado que la gobernabilidad puede lograrse parcialmente con acuerdos y

2 Albert Hirschman (1975) bautizó este fenómeno de discontinuidad como el “Síndrome de la Fracasomanía”.

coaliciones que mantengan el consenso alrededor de ciertos temas fundamentales. Por ejemplo, los frentes partidistas en Bolivia han permitido un tránsito legislativo adecuado a las medidas gubernamentales, especialmente económicas. En Colombia, el llamado Frente Nacional y los acuerdos subsiguientes entre los dos partidos tradicionales -Liberal y Conservador- le dieron al panorama político una salida necesaria para los momentos de crisis. En Chile, las coaliciones partidistas han obtenido un acuerdo esencial sobre aspectos fundamentales del desarrollo del país. La negociación en busca de consensos ha resultado ser un medio adecuado para mantener un nivel importante de gobernabilidad. A contrapecho de la teoría clásica que mostraba a los partidos como canales entre la sociedad y el Estado, la experiencia latinoamericana le señala a los partidos políticos un rol diferente cuando estos logran la concertación entre facciones de la élite sin que en ello medie el conjunto de la población. Los acuerdos han sido altamente beneficiosos para mantener la estabilidad de algunos gobiernos en Latinoamérica. A la gobernabilidad se han podido acercar gracias a que las fuerzas políticas han logrado concertar frentes. Por el contrario, aquellos países con una fuerte atomización del sistema de partidos ha generado una gran inestabilidad. Este ha sido el caso de Ecuador o Perú, donde durante la década de los ochenta, subsistió un fraccionamiento partidista con enormes distancias ideológicas y disensiones insalvables. Las fisuras del sistema de partidos han llevado a algunos gobiernos de la región al extremo de clausurar congresos o impedir el libre ejercicio de la oposición, tal es el caso de los presidentes Fujimori en el Perú y Serrano en Guatemala. Con estas acciones antidemocráticas el Ejecutivo en estos dos países ha pretendido cambiar las reglas de juego de la democracia sin pensar que con esto lo que han hecho es cortar de tajo cualquier posibilidad de gobernabilidad pluralista. Esto para no hablar de la dependencia en los militares en ambos casos. Vale la pena recordar al respecto las palabras de Alfredo Ramos: "En el Estado democrático, a diferencia de otras fórmulas políticas, los partidos forman parte del 'poder organizado del Estado'. No son solamente instancias mediadoras de los intereses de la sociedad en sus relaciones con el Estado, que como una visión sociológica generalizante nos ha querido hacer ver, sino que constituyen los agentes privilegiados de la hegemonía que se construye desde el Estado hacia la Sociedad". (Ramos, 1991).

Lo anterior no quiere decir que a la gobernabilidad se llega exclusivamente con acuerdos entre partidos. De hecho, existen innumerables variables y contingencias que amenazan la estabilidad de un régimen. No obstante, el sostén de los partidos políticos se constituye en un punto de apoyo nada despreciable para un gobierno que busca desenvolverse adecuadamente en escenarios como los órganos legislativos. "Los partidos políticos comparten con otras instancias sociales la función de

integrar demandas ciudadanas, son canales de vertebración social y expresión de intereses de la sociedad civil a la cual representan. Pero también sin expresión de la voluntad organizativa de la sociedad; por ello, su propósito es gobernar o participar en el gobierno". (Sánchez, 1992).

En este orden de ideas, valdría la pena preguntarse si el problema de gobernabilidad reside en especial en crear mayorías o si, por el contrario, es el resultado de limitar las diferencias entre los sectores que inciden en las decisiones gubernativas. Quizás la gobernabilidad sea una mezcla de ambas opciones: apoyo popular y apoyo de las facciones de la élite. Dicho de otro modo, la gobernabilidad puede darse ya sea primero obteniendo el consenso y luego generando el apoyo; o ya sea buscando el apoyo para luego intentar un entendimiento entre los decisores. De hecho, en Latinoamérica el consenso entre las facciones de la élite resulta ser la estrategia privilegiada para conseguir una adecuada gobernabilidad. Sin embargo, los partidos deben promover niveles aceptables de gobernabilidad no sólo constituyéndose en voceros del Estado para lograr hegemonías; sino también retomando su rol de instancia mediadora de los intereses de la sociedad civil tal como lo preconizaba la teoría clásica. Tener uno u otro apoyo puede generar cierto grado aceptable de gobernabilidad, pero el Estado sigue siendo vulnerable a un sinnúmero de avatares que pueden poner en entredicho su control político. No obstante, de no contar con la aceptación y validez de la población, la gobernabilidad comienza a debilitarse acentuando la crisis de los partidos.

En América Latina, la población ha buscado expresarse por caminos alternativos directos que prescinden de cualquier medio político convencional. La corporativización de la sociedad con el surgimiento de asociaciones y gremios que persiguen intereses generalmente inmediatos y limitados señalan la urgencia de los ciudadanos por vehiculizar sus demandas. Igualmente, el surgimiento de movimientos sociales de todo rango presupone que la táctica de los consensos en la élite o las coaliciones entre partidos no han sido suficientes para mantener una sana gobernabilidad. Los levantamientos populares en Santiago del Estero, Caracas o Chiapas, a pesar de sus diferencias son, a todas luces, el reflejo de la descomposición social que muchos países del hemisferio habían creído superar en el camino al desarrollo. Sin embargo, en los países latinoamericanos subsiste el elitismo democrático que limita el ejercicio de la política exclusivamente a la toma de decisiones del gobierno donde la élite gobernante restringe la intervención de la población en su mayoría. Por ello, la democratización de la región y el acceso a niveles adecuados de gobernabilidad necesitan relevar el rol de los partidos entre la sociedad o, como lo dijera un autor "... la `partidización' de las relaciones de poder entre las diversas fuerzas sociales... auténticas **democracias de partidos**". (Ramos, 1991).

2. Algunas alternativas

La importancia de los partidos políticos en el proceso de gobernabilidad política se soporta en tres ejes temáticos principales: el político, mediado por la legitimidad y la credibilidad del conjunto de las instituciones del Estado de derecho. El económico, basado en la eficacia y la eficiencia, lo cual implica articular claramente la definición precisa de las metas de gobierno y la canalización de los recursos materiales requeridos para su logro. Y el social, relacionado con la activa participación e intervención de la sociedad civil en el entendido que este componente fundamental del proceso político deberá dejar atrás su parsimonia para asumir un mayor compromiso con la búsqueda de soluciones a los problemas de desarrollo.

Los partidos políticos deben estar ligados a todos y a cada uno de estos soportes o ejes temáticos. En la vertiente política de la gobernabilidad existe una acción partidista de compromiso con los parámetros democráticos, respetando el marco de las instituciones políticas. El sustento de la gobernabilidad desde esta perspectiva, en algunos países como Colombia desde la Constitución de 1991, se encuentra en el Estado social de derecho que consagra el pluralismo, la defensa de los derechos humanos, el respeto a las minorías, la igualdad ante la ley, la participación y la descentralización.

En la vertiente económica, a los partidos políticos les corresponde exigir al gobierno de turno acciones estables y firmes de política social que impidan la continuidad del fortalecimiento de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza en los países latinoamericanos. Por un lado, deben actuar estratégicamente para armonizar acciones que contrarresten el ímpetu neoliberal que actualmente está seduciendo a muchos gobiernos del hemisferio pero que en realidad tan solo está beneficiando a unos pocos empresarios de la industria y del comercio provistos de los recursos de capital, ciencia y tecnología requeridos para competir efectivamente en el marco imperativo y homologante de la internacionalización de la economía. Por el otro, a los partidos bajo la perspectiva del marco de la gobernabilidad democrática les corresponde promover, generar y fiscalizar la inversión pública destinada al mejoramiento de la infraestructura necesaria para la adecuación a la economía de mercado ya mencionada.

Por último, en la vertiente social, los partidos deben constituirse en los confederados de la articulación y de la expresión de los intereses de una sociedad civil afectada por la fragmentación, la falta de solidaridad y la casi imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre lo fundamental. Partidos que propugnen por la tolerancia y que se conviertan en los motores de la promoción de las nuevas formas de

participación ciudadana que hagan posible la verdadera transición de una democracia electoral restringida y ligada al simple acto de elegir y ser elegido, a una democracia participativa que conlleve nuevos mecanismos como el referéndum o la revocatoria del mandato entre muchos otros.

Ni los “*outsiders*” ni el populismo han logrado tocar el problema de fondo - reformar los partidos para una sana gobernabilidad- porque estas propuestas evaden la posibilidad de intermediación de los movimientos políticos. Actualmente, los partidos políticos gravitan alrededor de una democracia electoral soportada sobre intereses meramente coyunturales dirigidos a ganar los comicios y a hacerse al poder. Por ello, los partidos deben abandonar su actual papel de grupos empresariales dedicados a la venta de la imagen de sus productos electorales para convertirse en partidos institucionales (programáticos e ideológicos) en el buen sentido del término. Las nuevas leyes de partidos que se emprenden en el marco de la nueva agenda gubernativa democrática de varios países no deben limitarse a contener consideraciones restringidas como la modernización, la transparencia y la efectividad de la mecánica electoral. La institucionalización de los partidos en América Latina debe procurar que estas organizaciones políticas vitales para la democracia se constituyan en los agentes promotores del nuevo marco de las instituciones políticas del Estado de derecho y en los facilitadores del acceso efectivo de la ciudadanía a los nuevos mecanismos de la participación³. De momento, los partidos políticos a

3 Los populistas han buscado generar un fuerte apoyo de la población por fuera de los partidos tradicionales creando movimientos políticos de corta vida. No obstante, la gobernabilidad no resulta mejorar con el neopopulismo. Como alternativa, en Latinoamérica está tomando fuerza una concepción que va de la mano con la desregulación del Estado como instrumento para ampliar los espacios democráticos. Entre otros, el escritor peruano Mario Vargas Llosa sostiene que en el continente la participación política debe ir acompañada de una participación directa en la economía de mercado por intermedio de la propiedad. Según esta postura enmarcada en el neoliberalismo, la democratización de América Latina no tendrá ningún futuro si no se prioriza la posibilidad de adquirir propiedad privada para el conjunto de la población. Aunque la propuesta no señala como acrecentar el poder adquisitivo de los sectores marginales, sus defensores consideran que la privatización que se está desarrollando actualmente debe servir para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. En otras palabras: en el proceso de desregulación estatal lo que vende el Estado puede llegar a manos de una población desposeída. Así sucedió, por ejemplo, en Inglaterra, donde la población pudo adquirir acciones de las empresas estatales en venta. Igualmente, en este proceso la gente pudo hacerse a apartamentos y residencias que pertenecían al Estado a un muy buen precio. Dentro de esta concepción se considera que las brechas sociales pueden cerrarse en la medida en que los más pobres obtengan algo de propiedad. Esta diseminación de la propiedad entre la población traería una mayor estabilidad social base para la gobernabilidad. La democratización se daría en ...

pesar de las normas y herramientas que han dictado los gobiernos de la región continúan en el marasmo, especialmente por una falta de voluntad política al no querer renunciar al clientelismo y a los vicios que reproducen los intereses de la llamada "clase política". (Orjuela, 1992).

En pocas palabras y usando las categorías de Sartori, ya clásicas, los partidos mismos deben constituirse en los agentes del tránsito de la democracia que se está gestando en el continente. Las conductas corruptas han suscitado una reacción ciudadana que permea un ambiente para que los partidos capitalicen esta situación proponiendo el saneamiento de las costumbres políticas. En este sentido, un nuevo camino ético debe ser trazado por los partidos mediante el liderazgo y la definición programática para motivar el seguimiento de la ciudadanía. Para lograr estos objetivos, los partidos deben emprender una labor de educación cívica que permita generar una cultura política que potencie la ciudadanía. Las nuevas formas de participación contempladas en las más recientes reformas constitucionales del hemisferio como la realizada en Colombia (referendo, plebiscito, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato, consulta popular, cabildo abierto...) suponen y requieren una cultura política sofisticada que de momento no existe. Por eso los partidos mismos deben constituirse en los agentes centrales del proceso de transición de la democracia electoral a la verdadera democracia participativa. Así, las nuevas leyes de partidos en el continente no pueden remitirse tan solo a garantizar la libre competencia, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la financiación, la inscripción o la modernización de los procesos electorales. Con ello no se estaría atacando el problema de fondo, es decir, partidos políticos vacíados de objetivos sociales que riñen con el paso de un Estado de derecho a un Estado social de derecho consagrado en las últimas reformas constitucionales en América Latina. Los partidos deben, entonces, superar el mero carácter coyuntural y electoral para desarrollar estructuras estables y permanentes sobre plataformas programáticas que

...una perspectiva económica pero no por medio de la eliminación de la propiedad privada como lo pretendían los marxistas, sino, por el contrario, con la misma extensión de la propiedad. Lejos de preservar los monopolios, esta propuesta pretende que la privatización sea el instrumento para la reforma social y económica. "Debería ser el medio de dar al pueblo tanto participación en el sistema como autonomía dentro de la sociedad". Esta perspectiva también persigue, al igual que el populismo, un grado de gobernabilidad importante por medio del apoyo de la población, esta vez dado por la diseminación de la propiedad. También con el populismo pretende la gobernabilidad sin las intermediaciones de los partidos. Solo la mediación de lo económico parece justificarse en la búsqueda de la gobernabilidad. Sin embargo, este enfoque al igual que el populismo, resulta reduccionista al considerar sólo las relaciones sociales y económicas menospreciando el significado de las luchas por el poder político.

recuperen, motiven y mantengan el interés de las mayorías desposeídas proclives a vincularse con ellos.

Los partidos políticos entonces merecen superar la satanización que los abruma; deben perder el carácter peyorativo y malsano que se les ha endilgado. En este sentido, los partidos políticos están *ad portas* de emprender el arduo proceso de recuperación del buen nombre de la política para que esta sea vista como un instrumento de la sociedad civil y no como un obstáculo a las reivindicaciones sociales. La legitimidad y validez del accionar político debe recobrarse, potencian- do ciudadanos conscientes de sus responsabilidades sociales, que logren desenvolverse a cabalidad en una democracia participativa. Entre otras tareas primordiales, los partidos políticos deberían, específicamente crear talleres de formación política; prestar asesorías para apoyar las iniciativas ciudadanas; ser agentes trasmítidores de los intereses de las comunidades locales que congenien con los intereses nacionales; crear una mentalidad de lo público; brindar información para que los ciudadanos puedan participar en el marco de la descentralización.

Hoy por hoy, el sistema de partidos en América Latina está obligado a presentar una perspectiva de mayor acción que permita encauzar todos los disentimientos y las diferencias por los vehículos legales, limitando las expresiones antisistema y el uso de la fuerza como medio e expresión y presión. Así vista, la superposición ideológica de los diferentes partidos con el consiguiente desdibujamiento de programas y proyectos políticos debe dar paso a la apertura de las compuertas de la competencia político-legal. En la acuciosa tarea de reformar a los partidos, la participación de los ciudadanos no debe limitarse al simple acto electoral, sino que, por el contrario, se hace necesario el desarrollo de líneas de trabajo orientadas hacia el fortalecimiento de otras actividades de la vida organizacional como los comités programáticos, los grupos de trabajo y las acciones de apoyo al reclutamiento. Los partidos deben, ante todo, retomar el liderazgo perdido en las premisas que hoy constituyen las principales líneas de acción gubernativa vistas en una perspectiva global y sistémica. Es claro que la iniciativa de los partidos amerita un especial protagonismo en el proceso y desarrollo de la reforma política al igual que en fortalecimiento de la descentralización en sus tres variantes: política, administrativa y fiscal. (Murillo y Ruiz, 1992).

Los verdaderos partidos modernos deben ser paralelamente partidos organizados y partidos democráticos, promoviendo la participación al interior de sus propias estructura, siempre bajo las garantías de la libre competencia que otorga el Estado. De esta manera, las bases pueden resultar más decisivas por encima de la “morbidez del caciquismo” y de las “maquinarias de partido”. (Pinzón, 1992).

En síntesis, en estas líneas se ha propuesto rescatar el papel de los partidos políticos como mediadores de las demandas de la sociedad civil, tal como lo señala la teoría clásica de la ciencia política. Aunque este rol puede ser un constante “deber ser” sin posibilidades aparentes de éxito; la búsqueda de niveles adecuados de gobernabilidad debe pasar por esta premisa. Quizás a simple vista se pretenda retomar utópicamente un planteamiento desgastado del papel de los partidos en las sociedades. Sin embargo, como dijo alguna vez Anatole France: “La Utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un porvenir mejor”. (Ungar, 1993).